



Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura
ISSN: 0120-2456
anuhisto@gmail.com
Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Atehortúa Cruz, Adolfo León; Rojas Rivera, Diana Marcela
VENEZUELA ANTES DE CHÁVEZ: AUGE Y DERRUMBE DEL SISTEMA DE "PUNTO FIJO"
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 32, 2005, pp. 255-274
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127113735009>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

VENEZUELA ANTES DE CHÁVEZ: AUGE Y DERRUMBE DEL SISTEMA DE “PUNTO FIJO”

Adolfo León Atehortúa Cruz¹
Diana Marcela Rojas Rivera²

Resumen

Los siguientes renglones intentan bosquejar la historia reciente de Venezuela, desde el llamado *Pacto de Punto Fijo*, en 1958, hasta el golpe de estado fraguado por Hugo Chávez Frías en 1992. La exposición comprende la caída de Marcos Pérez Jiménez, los períodos de ascenso, prosperidad y declive del régimen de *Punto Fijo*, y una hipótesis para explicar el significado de Chávez como esperanza para la población venezolana, luego de su irrupción en la escena política contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Palabras clave: Venezuela, historia, *Sistema de Punto Fijo*, Hugo Chávez Frías.

Abstract

This is an overview of the recent history of Venezuela, from the *Pacto de Punto Fijo* in 1958 to the coup d'état forged by Hugo Chávez Frías in 1992. It includes the fall of dictator Marcos Pérez Jiménez, the periods of rise, prosperity and decline of the *Punto Fijo* régime, and a hypothesis regarding Chávez as a hope for Venezuelan people after his irruption on the political scene against the government of Carlos Andrés Pérez.

Key words: Venezuela, history, *Punto Fijo*, Hugo Chávez Frías.

De la dictadura al sistema bipolar de partidos

En enero de 1958, el *Pacto de Punto Fijo*, firmado entre los representantes de los más importantes partidos políticos de Venezuela, sentó las bases para el más prolongado período de gobiernos civiles y de elección popular en la historia contemporánea de ese país. El pacto copió su nombre al escenario de los acuerdos: la casa de Rafael Caldera, fundador y dirigente de uno de los partidos políticos que suscribió el acuerdo. Así mismo, el acuerdo cerró la última dictadura de medio siglo y abrió, en cambio, la llamada “bipolaridad” entre los partidos más visibles como alternativa de gobierno:

¹ Profesor Titular Departamento de Ciencias Sociales y Jefe DGP-Centro de Investigaciones CIUP, Universidad Pedagógica Nacional.

² Profesora Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

* Recepción: 17 de mayo de 2005. Aprobación: 7 de junio de 2005.

Acción Democrática (AD), de tendencia social demócrata, y el Partido Socialcristiano (Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI).

La dictadura que antecedió al *Pacto de Punto Fijo* había derribado, en noviembre de 1948, al breve gobierno constitucional del novelista Rómulo Gallegos que, en lo político, pasó a la historia por sus banderas democráticas. El movimiento militar fue encabezado por su Ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, en compañía de Luis Llovera Páez y de Marcos Pérez Jiménez. El derrocado Rómulo Gallegos, exiliado en Cuba, señaló como instigadoras del golpe a “poderosas fuerzas económicas, las del capital venezolano sin sensibilidad social”, y a “las del extranjero explotador de la riqueza de nuestro subsuelo”.³ Su partido, Acción Democrática, entró a la clandestinidad y algunos de sus militantes optaron por la resistencia armada y el terror.

Hasta 1950, la dictadura permitió la actividad de algunos partidos heredados de la Asamblea Constituyente, elegida por votación popular en 1946. No obstante, entre los militares, dos tendencias se distinguieron claramente: la que intentaba propiciar el retorno democrático con una salida electoral y aquella que trabajaba por el poder absoluto en cabeza de los uniformados. Esta última se fortaleció tras el asesinato de Delgado Chalbaud, atribuido a Pérez Jiménez, y usurpó el poder al desconocer el triunfo electoral de la Unión Republicana Democrática (URD), en diciembre de 1952.

Algunas comparaciones podrían efectuarse entre el régimen de Pérez Jiménez en Venezuela y el de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. A grandes rasgos, notorias semejanzas pueden encontrarse en la ejecución de importantes obras de infraestructura; en la modernización de actividades productivas en el campo, ligadas a la movilidad de la fuerza de trabajo (impulsada en Colombia, además, por la Violencia); en la expansión económica sobre sectores secundarios, que permitió considerables índices de crecimiento; así como en diversos intentos por estrechar lazos orgánicos con sectores de población estimulados por el populismo, para construir con ellos un partido político propio y dilatar al extremo la permanencia en el poder.

En Venezuela, la fiebre por la construcción y la urbanización se apoderó de los proyectos de gobierno. La arquitectura, a veces suntuaria, pretendía mostrar la eficacia del régimen, impulsar el empleo y facilitar la corrupción. En Colombia, la construcción del Ferrocarril del Atlántico, del aeropuerto internacional El Dorado, de la televisión nacional y de hidroeléctricas, impuso nuevos ritmos al desarrollo urbano y del capital. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, el café alcanzó los mejores precios en medio siglo de historia exportadora y se intentó reordenar la política de producción de hidrocarburos en Ecopetrol. Al mismo tiempo, en Venezuela, el petróleo otorgó al gobierno de Pérez Jiménez grandes inyecciones de capital extranjero que permitieron inversiones paralelas en la industria manufacturera, en la

³ Acción Democrática, *Venezuela bajo el signo del terror 1948-1952. Libro negro de una dictadura* (México: Editorial Centauro; Caracas: edición facsimilar José A. Catalá, 1974) 37.

construcción, la agricultura y los servicios, originando así cierta solvencia financiera del Estado que dibujó, desde entonces, el porvenir de Venezuela.

Aunque las coyunturas políticas de cada país fueron bastante diferentes, el final de ambos regímenes coincidió en lo concreto: El *Pacto de Sitges* entre Alberto Lleras y Laureano Gómez que creó el Frente Nacional para Colombia, y el *Pacto de Punto Fijo* que, si bien no mencionó una alternancia presidencial, excluyó a la oposición en Venezuela, particularmente al Partido Comunista Venezolano (PCV), y construyó, a la larga, una estabilidad bipolar AD-COPEI sin discrepancias ideológicas y sin riesgos de sobresalto para el intercambio en los mecanismos de poder.

Brillo y eclipse del sistema de *Punto Fijo*

El sistema político que arranca en Venezuela con el año de 1958, ha sido materia de diversos análisis e interpretaciones. Tal como sucede en Colombia con el Frente Nacional, a los gobiernos del *Pacto de Punto Fijo* en Venezuela se los caracteriza como responsables de un sistema de coalición entre las élites, excluyente y restringido,⁴ cuyos compromisos clientelares y de rapiña se incrustaron en la estructura y socavaron finalmente el funcionamiento de las instituciones.⁵

Desde luego, la formulación de la hipótesis no es sencilla. Posee aristas y variantes tan discutibles como lo es el trazo de una semejanza con Colombia. Para analizarla, tomaremos dos caminos. En primer lugar, proponer una periodización para su estudio y, más adelante, ensayar una hipótesis propia.

La experiencia de *Punto Fijo* en Venezuela podría periodizarse en tres momentos claramente singulares: 1959-1974, fase en la cual la debilidad del nuevo régimen se supera lentamente para fundar un esquema bipartidista cada vez más fuerte; 1974-1979, período en el cual la fiebre de los dólares y el sueño de la prosperidad invaden a Venezuela, y 1979-1992, fase caracterizada por el colapso económico, la crisis del sistema y la irrupción del descontento.

Un pacto de élites

El primer período (1959-1974) se inicia con dos gobiernos del partido Acción Democrática y termina con uno del COPEI. A diferencia del Frente Nacional en Colombia, consolidado con los mandatos de Alberto Lleras y Guillermo León Valencia, los planteamientos de unidad nacional en Venezuela recorren un sinuoso camino durante los primeros gobiernos del *Pacto*. El Frente Nacional en Colombia nace definido con el plebiscito de 1957. El pueblo vota la alternancia en el gobierno

⁴ Daniel H. Levine, *Conflict and political change in Venezuela* (Princeton: Princeton University Press, 1973).

⁵ Diego Urbaneja, *Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX* (Caracas: CEPET, 1992).

y la partición equitativa de los cuerpos colegiados y cargos más importantes de la administración pública. La oposición, excluida del sistema, se expresa legalmente a través de tres grandes sectores: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), encabezado por Alfonso López Michelsen, quien regresa a las toldas del Partido Liberal para ser presidente de la República en 1976; la fracción del partido conservador liderada por Gilberto Alzate Avendaño, que pierde fuerza paulatinamente; y la Alianza Nacional Popular (ANAPO), dirigida por el General Rojas Pinilla, quien opta por la participación electoral y sufre sin réplica el robo de las elecciones presidenciales en 1970. La oposición armada será, al menos hasta la década de los ochenta, muy débil y fraccionada.

En Venezuela, el *Pacto* es seguido por una “Declaración de Principios” y el “Programa Mínimo de Gobierno”. Su base se construye con el compromiso de las organizaciones que se autodefinen democráticas: AD, COPEI y URD. El objetivo: formar un gobierno de unidad nacional y respetar los resultados electorales. El Programa Mínimo define la elaboración inmediata de una Constitución, que resulta adoptada en 1961, pero excluye del juego a las fuerzas opositoras. El Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desprendido de AD, declaran la lucha armada. Su fuerte presencia parlamentaria, una influencia importante en las organizaciones populares y el apoyo de algunos sectores del estamento militar, convulsionan al gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963). La polarización se traslada a la lucha sindical, estudiantil y gremial, en cuyas organizaciones se articulan los partidos de gobierno y se inserta el Estado, gracias a la Ley del Trabajo y a una agresiva política social posibilitada por los ingresos petroleros. Los sectores económicos más poderosos y representativos cierran filas en torno a la defensa del gobierno de Betancourt y del pacto.

A diferencia de Colombia, en donde los militares se suman al Frente Nacional bajo la orientación civil, el descontento es opacado y derrotado por la decisión de los generales de no participar en alzamiento alguno o aceptar sin discordia su extrañamiento de la política y del poder, como en el caso del General Alberto Ruiz Novoa (1964), los militares venezolanos protagonizan diversos alzamientos antes de admitir la primacía de los civiles y su pacto. Movimientos como el del General Jesús María Castro León en abril de 1960, el alzamiento del Coronel Edito Ramírez y del Destacamento de la Guardia Presidencial en febrero de 1961, y el más célebre, el “Barcelonazo”, liderado por el Mayor Luis Alberto Vivas, son ejemplo de ello. Desde otra orilla, alzamientos como el de Carúpano, liderado por el capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina, y el de la Base Naval de Puerto Cabello, dirigido por Hugo Morales, en mayo y junio de 1962, respectivamente, expresarán sentimientos de izquierda, nacionales y revolucionarios, influidos por el PCV y el MIR.⁶

⁶ R. J. Velásquez, “Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo”, *Venezuela moderna: Medio siglo de historia 1926-1976*, Fundación Eugenio Mendoza (Barcelona: Ariel, 1976).

Al final, el definitivo ingreso o aceptación de los militares venezolanos al *Pacto de Punto Fijo*, se logrará por cinco vías: mejora sustancial en sus condiciones sociales y económicas; autonomía presupuestal para la compra de equipos militares sin interferencia civil; desmonte gradual de prácticas que pudieran favorecer el militarismo; intervención del poder legislativo en posiciones claves de la carrera militar; y un profundo discurso anticomunista, apoyado por la influencia política y militar de Estados Unidos. En pleno apogeo de la Revolución cubana, el régimen de Betancourt se convierte, entonces, en el primer modelo contrainsurgente para América Latina y la administración de Raúl Leoni (1963-1968) lo consolida. El Consenso de élite, extendido a las Fuerzas Armadas, pasa a los empresarios y a la Iglesia, cuyo papel se reconoce con la Ley de Concordato Eclesiástico, en 1964.

Al igual que en Colombia, entre los partidos liberal y conservador, los cargos directivos en los aparatos legislativo y judicial, así como las más importantes posiciones del Estado, son controlados y distribuidos por AD y COPEI. Para 1968-1973, el Partido Socialcristiano asume la presidencia con Rafael Caldera y la izquierda armada, militarmente derrotada, decide su reinserción a la vida legal. El Estado adquiere un papel central e intervencionista, a través de mecanismos como la regulación, la protección y el subsidio. Se garantiza la competencia político-electoral y los partidos oficialistas se fortalecen en el juego de la representación y la canalización de conflictos. Los militares son alejados de la política, se subordinan las élites políticas regionales y se adquiere el apoyo total de los medios de comunicación. En la conclusión más citada por los analistas políticos venezolanos, el modelo es denominado *sistema populista de conciliación de élites*.⁷

En materia económica, este primer período presenta dos características importantes. En primer lugar, logra modernizar el aparato productivo con una articulación concreta al mercado internacional. Pero, a la vez, coloca el ritmo de su desarrollo a merced del petróleo. La situación es analizada en forma crítica por la mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales y económicas en Venezuela. La renta obtenida del petróleo se traslada al conjunto de la sociedad por diversos mecanismos: gasto e inversión públicos, sueldos y salarios, baja tributación interna, tasas de interés fijas, subsidios y préstamos. El tipo de cambio y la libertad cambiaria se sobrevalúan para subsidiar la compra de moneda extranjera y apoyar la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado asume la satisfacción de intereses socioeconómicos para sectores específicos, abriendo paso a un sistema semicorporativo, con la intensa participación de Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela.⁸

Más allá de la influencia determinante del petróleo en la economía, existe coincidencia en torno a la valoración que su poder ejerce sobre la política. El

⁷ Juan Carlos Rey, “La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación”, *Revista de estudios políticos* 74 (Caracas, 1991): 553-578.

⁸ Cf. M. Kornblith y T. Maingón, *Estado y gasto público en Venezuela. 1936-1980* (Caracas: UCV-Ediciones de la Biblioteca, 1985).

petróleo acentúa la desproporción entre el sector público y el sector privado de la economía. Este último se coloca a la zaga de las actuaciones políticas, de grupos o de individuos, que si bien favorecen a largo plazo los intereses de las clases dominantes, pueden eventualmente constituir un estorbo o un inconveniente en la realización de su proyecto nacional.⁹ En síntesis, la base del sistema se construye sobre los ingresos de la industria petrolera. Del mercado de este mineral no sólo depende la modernización, forma y dimensión del aparato institucional del Estado; con él se entrelazan, igualmente, el presupuesto de la nación y las relaciones de lo público en todos sus espacios, sin escapar, incluso, la opinión y el sufragio.

El sueño de la prosperidad

Al incremento de los recursos petroleros se debe el brillo histórico del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1978). La centralización y fortaleza alcanzadas por el Estado en el período anterior, permiten ahora una lógica providencial que se levanta sobre el auge de los precios petroleros y el crecimiento económico. Pero el Estado no sólo regula la vida institucional del país; por supuesto, controla de manera absoluta las divisas con las cuales el andamiaje económico logra funcionar y, de cierta manera, redistribuye la renta nacional.

El carácter providencial del Estado no es producto de una concepción ideológica en su cuerpo administrativo. Aunque ciertas posiciones florecen con timidez y los partidos se reclaman demócratas y sociales, la capacidad de éste se dirige a la negociación de las contradicciones vitales, a la intervención real en el terreno clave de la economía y a la regulación jurídico-política de las relaciones sociales. A través de los partidos, excepcionalmente poderosos, el Estado penetra y controla la vida social. Los partidos colonizan las organizaciones civiles: los sindicatos, los gremios urbanos y rurales, los comités estudiantiles, las asociaciones profesionales; subordinan sus estructuras y las colocan al servicio de los intereses programáticos y electorales.¹⁰

⁹ Germán Carrera Damas, *Una nación llamada Venezuela* (Caracas: Monte Ávila Editores, 1984) 129.

¹⁰ A principio de los ochenta, uno de los autores del presente artículo visitó por primera vez Venezuela. Estudiante universitario en una época en que las organizaciones de izquierda y el movimiento guerrillero se disputaban en Colombia la influencia sobre las representaciones estudiantiles, la sorpresa fue encontrar en la Universidad Central de Venezuela una influencia total de los partidos del sistema. En efecto, AD y COPEI dominaban el panorama de las representaciones estudiantiles con una baja y sometida presencia del Movimiento al Socialismo MAS. Sólo en una Escuela, la Escuela de Historia, la izquierda militante había obtenido mayorías en la elección del Comité Estudiantil y, por consiguiente, la presidencia de éste. Para algunos analistas, los partidos se convierten en el único vehículo nacional de la acción política: la política se reduce a la actividad partidista, a la competencia regulada dentro y entre los partidos. Lo público es un asunto casi exclusivo de los partidos, “al punto que el sistema político venezolano puede ser descrito esencialmente como un sistema de partidos”. Ángel E. Álvarez, “La crisis de hegemonía de los partidos políticos venezolanos”, *El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones*, de Ángel E. Álvarez, coord. (Caracas: UCV, 1996) 133.

La participación electoral en Venezuela a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez será, por cierto, usualmente alta. Los acuerdos entre los partidos y sus élites tejen la fortaleza del sistema y construyen leyes que acentúan el poder existente. En las elecciones presidenciales de 1958, 1963 y 1968, la favorabilidad de AD y COPEI no superó nunca el 65%, y en 1963 bajó, incluso, al 52%. En 1973, en cambio, sobrepasó el 80%, y subió al 88% en 1978 y 1983.¹¹ La influencia de los partidos en la vida social se hizo abrumadora. En la práctica, una enorme red de contactos y compromisos para compartir el poder y sus beneficios invadió el transcurrir de la sociedad. Los partidos oficialistas coparon las organizaciones de masas y las convirtieron en apéndices burocráticos del Estado.¹² La nacionalización de la industria petrolera y la expansión de su renta, ocurrida tras el *shock* de 1974, sirvió para enmendar los clásicos problemas del capitalismo frente a la educación, el empleo, la salud y la vivienda. El Estado actuó como empresario y realizó cuantiosas inversiones en infraestructura, o se asoció en compañías de capital mixto en diversos sectores productivos. Como si se tratara de un país del primer mundo, miles de ilegales colombianos pasaban la frontera para desempeñar, a bajo salario, los oficios que los venezolanos ya no consideraban dignos. La situación es resumida en breves renglones por Daniel H. Levine:

... en términos económicos, una moneda fuerte, baja inflación, crecimiento sostenido y un rol dominante del Estado central como regulador y distribuidor del ingreso petrolero. En lo político, un Estado centralizado, instituciones orientadas nacionalmente (incluidos los partidos), una clase política profesional procedente de distintas partes del territorio nacional y, por supuesto, unas fuerzas armadas subordinadas. En términos sociales, educación masificada, gran movilidad social y geográfica así como gradual homogeneización de la vida cultural y organizacional del país.¹³

El derrumbe

Las ventajas del sistema político y económico en este segundo período se convirtieron, sin embargo, en desventajas a partir de 1979. La omnipotencia del petróleo cayó, como su *boom*, al final de los años setenta. La drástica disminución

¹¹ Fuente: Consejo Supremo Electoral de Venezuela, *Elecciones presidenciales*. Tomado de Rigoberto Lanz, “Venezuela: Los límites de la democracia made in USA”, *Los sistemas políticos en América Latina*, Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, coords. (México: Siglo XXI Editores-Universidad de las Naciones Unidas, 1989).

¹² José Molina y Carmen Pérez, “Evolution of the Party System in Venezuela 1946-1993”, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 2 (1998).

¹³ Daniel H. Levine, “Diez tesis sobre la decadencia y crisis de la democracia en Venezuela”, *Venezuela en transición: Elecciones y democracia 1998-2000*, José Vicente Carrasqueño, Thais Maingon y Friedrich Welsch, eds. (Caracas: Redpol-CDB Publicaciones, 2001).

¹⁴ Cf. Michael Gavin y Ricardo Hausmann, “Las raíces de las crisis bancarias: El contexto macroeconómico”, *Las crisis bancarias en América Latina*, Ricardo Asuman y Liliana Rojas Suárez, comps. (Santiago de Chile: BID-FCE, 1996).

del precio del petróleo tuvo un impacto severo en el sistema bancario.¹⁴ Al afectar la capacidad de los prestatarios para cubrir sus deudas con la banca interna, el *shock* se declaró adverso al ingreso nacional. Aunque Venezuela logró aplazar la crisis con una maxi-devaluación que lesionó el valor real de los activos de la banca, las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y la aplicación de los nuevos modelos económicos implementados a partir del llamado “Consenso de Washington”, comenzaron a afectar al sistema venezolano en su conjunto.

De la misma manera como el petróleo moldeó antes al Estado, ahora generó efectos transformadores en sentido negativo. Venezuela estaba acostumbrada a una mejoría gradual en la distribución factorial de un ingreso siempre creciente, a una pobreza moderada y, con Argentina, a compartir los mejores indicadores de bienestar social en América Latina. El esquema de industrialización por sustitución de importaciones, que pretendió imponerse como inversión para las divisas petroleras, fracasó en un contexto en donde importar resultaba mucho más barato y más fácil que producir, en donde la oferta de bienes no tradicionales se minimizó, y en donde el aparato industrial, reducido e ineficiente, se convirtió en apéndice de la economía petrolera y parásito del Estado. La estructura de consumo, las limitaciones tecnológicas y la concentración del ingreso, tampoco favorecieron la construcción de una industria nacional diversificada.

En lo que hemos denominado tercer período del régimen de *Punto Fijo*, Venezuela comenzó a experimentar la contracción del ingreso real y la pérdida de poder adquisitivo en sus salarios. La calidad de los servicios prestados por el Estado, el subsidio a la empresa privada y la cobertura pública en salud y educación, se derrumbaron sin esperanza. Una élite política acostumbrada a administrar en la opulencia, cayó presa de la corrupción y la indolencia. El municipio, concebido como eje de la participación política y de la descentralización pública, se convirtió en apéndice de la organización burocrática del Estado; célula del más puro clientelismo y espacio de saqueo en contra del erario público.

Son numerosos los estudios que describen este nuevo panorama en la historia reciente de Venezuela. Para algunos analistas, incluso, el derrumbe del “petro-Estado” significó el derrumbe de la democracia: sin crecimiento económico y sin dinero, el poder de los partidos descendió y las lealtades se debilitaron.¹⁵ La corrupción doblegó a las instituciones y los pactos sobre los cuales se había levantado el sistema comenzaron a romperse.¹⁶ Un cuerpo de valores relativamente frágil; soportado en un esquema clientelar y oportunista, con un carácter “predominantemente instrumental y utilitario”, se hizo “altamente vulnerable y sensible a los problemas de funcionamiento eficaz”.¹⁷ En la medida en que lo primordial es

¹⁵ Terry Karl, *The Paradox of Plenty Oil Booms and Petro States* (Berkeley: University of California Press, 1996).

¹⁶ Daniel Hellinger, *Venezuela: Tarnished Democracy* (Boulder: Westview Press, 1991).

¹⁷ Juan Carlos Rey, *El futuro de la democracia en Venezuela* (Caracas: IDEA, 1989) 258-259.

la capacidad distribuidora y no la productiva, la asignación de beneficios más que la eficiencia, “tenemos la clave para entender la gradual debacle del liderazgo”: su experiencia era la de gerentes del clientelismo más que la de “decisores políticos”.¹⁸

El punto de ruptura ocurrió el 18 de febrero de 1983, el día conocido como “viernes negro”, cuando la divisa colapsó y se devaluó la moneda. De allí en adelante, la crisis sobrevino en cadena y los acontecimientos fueron cada vez más contundentes. Sin embargo, a pesar de las señales, ni el gobierno de Luis Herrera (1978-1983), a quien correspondía enfrentar de choque la emergencia, ni el siguiente de Jaime Lusinchi (1984-1988), emprendieron programas coherentes, serios y oportunos de ajuste económico: “el control de cambios fue mal administrado y la corrupción hizo su agosto; las importaciones se desbordaron; se pregón austeridad fiscal y no se cumplió; la política monetaria fue contradictoria y propició la salida de capital; el tratamiento de la deuda externa fue desacertado”.¹⁹ Uno y otro intentaron reactivar la economía a partir del gasto público, cuando al precio del petróleo no lo detenía nadie en su picada.

El círculo se hizo vicioso: el déficit fiscal generó inflación y ésta, a su vez, devaluó la moneda; la devaluación, en lugar de proporcionar recursos al Estado, amplió su brecha fiscal y propagó la inflación. La capacidad pública de gestión se deterioró frente a la deuda externa y el poder adquisitivo sucumbió ante el alza constante de los precios.

Empecinado en los ajustes neoliberales que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial exigían para el pago de la deuda externa, el gobierno de Lusinchi intentó la búsqueda de medidas políticas: declaró agotado el *Pacto de Punto Fijo* y llamó a un entendimiento nacional a través de un nuevo *Pacto Social*. Su propósito apuntaba, ante todo, al desmonte del descontento con la participación política de nuevos sectores, en la distribución que aún podía realizar el Estado con las rentas del petróleo, y no a soluciones de fondo en los problemas estructurales. La inflación se mantuvo en elevados niveles y la devaluación del bolívar siguió su curso. La brecha entre los ingresos ordinarios del Fisco Nacional y los gastos acordados sobre el presupuesto, se ensanchó aún más, a pesar del ajuste macroeconómico que Lusinchi impulsó. Se agotaron las reservas internacionales pero no se corrigió la organización del mercado, ni el masivo gasto público, menos aún el desequilibrio básico entre la demanda y la oferta real de producción nacional de bienes y servicios, ni las millonarias transferencias de divisas.

Tal vez era demasiado tarde. El 27 de febrero de 1989, Venezuela vivió los disturbios urbanos más sangrientos de toda su historia. *El Caracazo* fue la expresión de un pueblo que perdía su esperanza; una respuesta espontánea y

¹⁸ Joaquín Marta-Sosa, “Problemas y agenda para la gobernabilidad democrática”, *La democracia bajo presión: Un análisis politológico*, Andrés Serbin y Andrés Stambouli (Caracas: Nueva Sociedad, 1993) 35.

¹⁹ D.F. Maza, *Crisis política y económica. 1989-1996* (Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1996) 324.

desesperada ante la amenaza de ajustes aún mayores durante el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), que empezaba.

Elegido con la expectativa de reeditar el brillo de los años setenta; bajo el espejismo prometido del pleno empleo, la justicia social y la redistribución de las riquezas, su panorama cambió en calidad de presidente. En febrero de 1989, por acuerdo con el Fondo Monetario, Pérez anunció la adopción de un tipo de cambio único, libre y flotante para el bolívar, la eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos por el Estado, y la liberación general de precios y tasas de interés. Con tales medidas, en definitiva, se eliminaba el tipo de cambio como mecanismo popular para la distribución de la renta, se suprimían los subsidios que habían permitido a los venezolanos alcanzar un nivel de vida por encima de sus posibilidades y se auguraba la depresión de los salarios reales.

El “paquete” de Carlos Andrés Pérez se identificó, entonces, con el eclipse económico y la miseria, la crisis total y la inflación. Aunque la estrategia de reajuste neoliberal que pretendía aplicar no era la causante directa de la crisis, actuó como veloz catalizador de la protesta. El “reajuste estructural”, planteado como “gran viraje”, fue visto por los venezolanos no como una solución sino, por el contrario, como una tortuosa vía para la profundización de sus problemas. En respuesta, el pueblo de Caracas se volcó a las calles para protestar pero también para saquear. Los partidos ya no controlaban a las masas, ya no regían su movilización.

Las dudas sobre el agotamiento del modelo desaparecieron: la caída en los precios del petróleo, el incremento desmedido de la deuda externa y el manejo corrupto de las arcas públicas, dejaron sin fondo al clientelismo y sin piso a las otrora fuertes organizaciones de partido. En medio del descontento generalizado, las instituciones empezaron a desplomarse con el peso de su decadencia. El intento de golpe militar, encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, fue, luego del *Caracazo*, la primera manifestación concreta del derrumbe político de los partidos y de las instituciones del Estado.

La “privación relativa” como motor del descontento. Una hipótesis

Ted Gurr define la *privación relativa* como “la tensión provocada por una discrepancia entre el *deber ser* y el *ser* de la satisfacción de valores colectivos”.²⁰ El *deber ser* se refiere a las condiciones de vida a las que los miembros del grupo social creen tener derecho; y el *ser*, a la posibilidad real y concreta de ellos, o a su percepción de lo posible. Según la teoría, los seres humanos conceden valor a muchos aspectos, intereses y necesidades de la vida social. Cuando estos valores resultan inalcanzables, cuando se ve amenazado el disfrute y la posesión sobre los mismos o cuando la consecución de uno supone la pérdida de otros, aparece la *privación relativa* y, con ella, la protesta, el levantamiento y la violencia. La

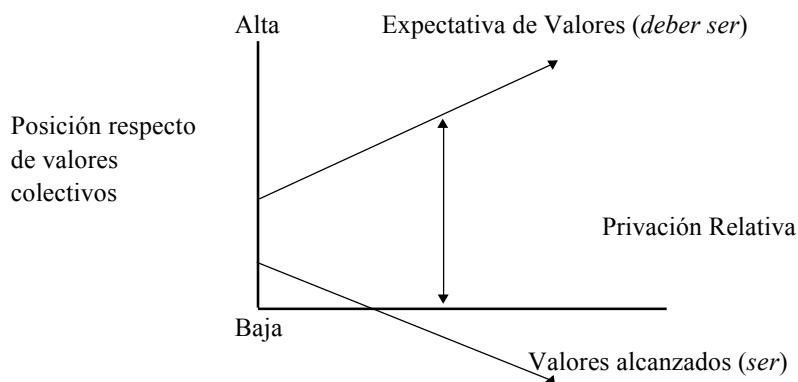
²⁰ Ted Gurr, *Why men rebel* (Princeton: Princeton University Press, 1970).

privación relativa es, entonces, el grado en que los individuos de un grupo social se sienten privados de condiciones que consideran básicas para su vida.

Las fuentes de privación residen en los procesos sociales que crean la diferencia entre aquello que los miembros del grupo social consideran que les corresponde, por derecho, y lo que reciben. Un primer modelo, denominado por Gurr “sentimiento de privación respecto de las aspiraciones”, es aquel en el cual las aspiraciones de la gente aumentan, mientras las posibilidades y capacidad para satisfacerlas permanecen constantes. Un segundo tipo, clasificado como “privación por decrecimiento”, ocurre cuando la capacidad de alcanzar valores disminuye, aunque las aspiraciones permanezcan constantes. El tercer modelo, llamado “privación progresiva”, es el que ocurre cuando un grupo social que ha experimentado el disfrute de valores con una expectativa de continuidad prevista, descubre una transformación en sus condiciones que no sólo impide el goce proyectado y creciente de sus valores sino que, incluso, arruina en forma progresiva la posesión real de los mismos.

En un plano cartesiano, el modelo de privación progresiva puede representarse a través del ángulo que crean la línea del *deber ser*, compuesta por las expectativas de valores que el grupo social posee en un momento determinado, y la línea del *ser*, referida a la posesión real o percepción de lo posible que ese mismo grupo posee en el momento. Mientras mayor sea la altura de la expectativa de valores y menor la capacidad o posibilidad real de alcanzarlos, mayor será el ángulo de privación relativa y, proporcionalmente, mayor será la potencialidad de la protesta, del levantamiento o del empleo de la violencia.

Privación progresiva



En esta dirección, la teoría de Gurr advierte que la protesta, el levantamiento, o el uso de la violencia, varían de acuerdo con la intensidad y alcance de la privación relativa entre los miembros de una colectividad. Si en una situación social el ángulo de privación relativa, es decir, el sentimiento con respecto a una clase de valores

se incrementa, la protesta, el levantamiento o el empleo potencial de la violencia, se convierte en considerable. Por supuesto, el hecho de que la privación desemboque o no en violencia, depende de diversos factores. La intensidad y alcance de la privación es uno de ellos, pero también lo es la manera como, culturalmente por ejemplo, se aprecian dichas privaciones.

Algunos estudios han aplicado la teoría de Gurr a las revoluciones norteamericana y francesa,²¹ pero también a la egipcia de 1952,²² y a la cubana de Fidel Castro.²³ Dichos acontecimientos, en términos generales, estuvieron precedidos por prolongados períodos de creciente prosperidad, deteriorados de manera abrupta por crisis económicas y candentes momentos de represión política;²⁴ el ángulo de la privación relativa habría incrementado sus grados e impulsado los alzamientos populares.

La coyuntura de Venezuela, a partir del eclipse del régimen de *Punto Fijo*, podría asimilarse a una situación de privación progresiva. Al comparar la situación Venezolana antes y después de 1980, las estadísticas fluyen como sustento irrefutable. La canasta familiar –o cesta alimentaria, como la llaman en Venezuela–, registró un aumento del 127% entre 1980 y 1984; pasó al 207% entre 1984 y 1988; y subió al 456% entre 1988 y 1992; para totalizar un incremento en el orden del 947% entre 1984 y 1992.²⁵ En 1989, el ingreso real medio disponible para cada venezolano fue inferior, en no menos del 35%, al que percibía en 1979. La tasa de desempleo subió del 5 al 13% en el mismo período, y el volumen del subempleo se amplió en un 40%.²⁶

El índice de precios al consumidor se situó en 250 en 1988, con un alza del 150%, con relación al año base de 1980. En cambio, el índice del salario nominal promedio tan sólo se situó en 170, es decir, con una elevación del 70% con respecto al año base. En sólo ocho años, entonces, el salario perdió un porcentaje superior al 50% en su poder adquisitivo.²⁷

El país en el cual las familias de ingreso medio formaban el más amplio sector social, cedió el paso a otro en donde lo predominante fueron los ingresos bajos. El indicador más contundente señala que el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza aumentó del 24% en 1981, al 60% en 1994.²⁸

²¹ Willi Adams, *Los Estados Unidos de América* (Méjico: Siglo XXI, 1979); C. Brinton, *Anatomy of revolution* (New Jersey: Prentice Hall, 1938).

²² J. C. Davies, "Toward a theory of revolution", *American Sociological Review* 27 (1962): 5-19.

²³ M. Zeitling, *Revolutionary Politics and the Cuban Working Class* (New Jersey: Princeton University Press, 1967).

²⁴ Cf. Robert Dowse y John Hugues, *Sociología política* (Madrid: Alianza Editorial, 1972) 493-540.

²⁵ Maza, *Crisis política...* 268.

²⁶ Maza, *Crisis política...* 321.

²⁷ Maza, *Crisis política...* 241.

²⁸ Gustavo Márquez, comp., *Gasto público y distribución del ingreso en Venezuela* (Caracas: Edición IESA, 1993).

De manera empírica, algunos autores han formulado ya las bases que sirven de sustento a la hipótesis propuesta. Aníbal Romero sostiene que el “paquete” de medidas anunciado por Carlos Andrés Pérez:

... no solamente creó desde el comienzo una enorme brecha entre expectativas y realidades, sino que, además, a esta dificultad política se sumó otra: la del excesivo optimismo de un gobierno que, como los hechos posteriores lo demostraron, jamás tuvo una clara percepción del profundo impacto socio-político y sociocultural de su programa de ajustes.²⁹

Para Daniel Levine, por otra parte, “la decadencia económica es siempre traumática y deviene particularmente amenazante en una sociedad que ha dependido por mucho tiempo del crecimiento constante del ingreso y acostumbrada a una alta movilidad social de personas y grupos”.³⁰ En otras palabras, una sociedad acostumbrada a cierta redistribución de crecientes ingresos petroleros por parte del Estado central y de los partidos, (un *deber ser* o expectativa de valores en alta escala), experimenta un abrupto decrecimiento de su capacidad real de posesión o percepción de lo posible (*ser* concreto de la realidad de los valores). Por consiguiente, dado el desplazamiento continuo de sus lados, el ángulo de privación relativa crece y produce estallidos del descontento:

No es cierto que los sucesos del 27 y 28 de febrero fueron imprevistos... No era sólo la puesta en ejecución del “paquete” sino toda la carga de la crisis, durante diez años, injustamente repartida. La distribución del ingreso se hizo más regresiva en ese tiempo: los menos acaparan más de aquel, los más sufren el encogimiento real de sus medios de vida; avanza la pobreza crítica y la pobreza sin calificativo, hasta cubrir amplios estratos de la clase media; el costo de vida se dispara entre presiones inflacionarias y marejadas de especulación; los servicios son cada vez más insuficientes y mal prestados; la corrupción cobra impulso bajo el signo de la escasez económica; la ostentación de los enriquecimientos irrita a los sumergidos en sus carencias vitales. ¿No había razones para la protesta airada? Doblado el peso de esa carga, el pueblo recibe el anuncio de nuevos padecimientos, de mayor sacrificio para él, de ajustes económicos que se harán a expensas de su ya comprimido nivel de vida. Se ofrece para aliviarlo una magra compensación salarial, cuya entrega se tarda mientras se impone de inmediato el alza de la gasolina, la desmedida alza de los pasajes en colectivos y el anuncio de otros aumentos de precios, de liberación de precios, que en la cruda experiencia de la

²⁹ Aníbal Romero, *Decadencia y crisis de la democracia: ¿A dónde va la democracia venezolana?* 3^a ed. (Caracas: Editorial Panapo, 1999) 74.

³⁰ Levine, “Diez tesis sobre la decadencia y...” 12.

gente significa desbordamiento especulativo. ¿Cómo no entender que todo ello es una incitación a la violencia popular?³¹

Al *Caracazo* del 27 de febrero de 1989 le seguirán los intentos de golpe militar en febrero y noviembre de 1992. Pero, más importante aún, tras ello ocurrirá la destitución de Carlos Andrés Pérez, en mayo de 1993, en medio de gigantes movilizaciones populares y acusado de corrupción. Ni el breve gobierno provisional de Ramón J. Velásquez, quien llamó a un nuevo acuerdo nacional, ni la elección de Rafael Caldera, en diciembre de 1993, con la propuesta de un “Pacto Solidario”, contaron con mejor suerte. Aunque Caldera no fue elegido como candidato tradicional del COPEI, sino como candidato independiente antipartidos, el apoyo popular estaba agotado.

Chávez como esperanza

En 1992, la situación económica venezolana era caótica. Si se intentara presentar un listado de problemas y dificultades, la síntesis dibujaría un esquema realmente crítico:

- a. Baja sustancial del ingreso petrolero de exportación
- b. Fracaso del modelo sustitutivo de importaciones
- c. Desequilibrio en la balanza de pagos
- d. Incremento de la deuda externa y agotamiento de las reservas internacionales
- e. Aceleración inflacionaria y encarecimiento desmedido del costo de vida
- f. Devaluación continua del bolívar, con la concomitante dolarización de la economía
- g. Deterioro extremo del salario real
- h. Decrecimiento de la actividad productiva de la nación, desajuste del Producto Interno Bruto y disparidad intersectorial de productividad
- i. Crisis de financiamiento de la gestión económica y social del Estado
- j. Liberación de precios y eliminación de subsidios
- k. Concentración regresiva de la riqueza y aumento de la pobreza
- l. Conversión de la deuda externa en deuda social y ausencia de políticas sociales para compensar el ajuste necesario.

Desde luego, la cuota de la crisis económica se vierte sobre la política. Al quebrarse la economía que soportaba el sistema, por ejemplo, los partidos pierden capacidad para canalizar conflictos y se debilita su papel como vehículos fundamentales de comunicación y mediación entre gobernantes y gobernados.

³¹ Maza, *Crisis política...* 387.

La credibilidad sobre el cuerpo administrativo de lo público desaparece, y se pierde con ello la capacidad de obrar como instancias para procesar intereses y gerenciar las demandas sociales. La democracia “hiperorganizada y elitista”, catalogada así por la capacidad de sus partidos y de asociaciones como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, para agregar, canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población, se derrumba.³²

La erosión de la legitimidad, el inmovilismo y la ineficacia institucional se erigen, entonces, como dimensiones fundamentales de su decadencia y crisis.³³ Los partidos ya no son agentes del cambio; ni siquiera garantizan el bienestar de su propia clientela. La cohesión y el sentido de pertenencia que existía con respecto a ellos, se traduce en abstención y rechazo. Ahora son maquinarias corruptas, electoreras y gerontocráticas. En ese sentido, la disciplina partidista que caracterizó a los venezolanos, particularmente frente a AD y COPEI, empieza a relajarse; los partidos pierden el control sobre las organizaciones de masas y las élites se fracturan o defecionan.³⁴ Las encuestas develan una valoración negativa de los ciudadanos frente a los partidos y sus afiliados se esfuman. La escasez de los valores alcanzados se vuelca en contra de los factores que los aseguraban: el modelo ya no es respetado ni deseado; su coherencia y estabilidad se llena de fisuras, al tiempo que la exclusión política y social de los sectores más empobrecidos prepara nuevos escenarios.

Tal como argumenta Gianfranco Pasquino, la actividad política se caracteriza por relaciones que se producen de formas, modos, frecuencias e intensidades distintas entre individuos, grupos, asociaciones e instituciones.³⁵ A partir del “viernes negro” Venezuela ya no será la misma. Si la violencia no estalla más allá del *Caracazo*, se debe a diversas circunstancias de la historia reciente de Venezuela: la protesta surge de manera espontánea y no existe una sola organización política que reivindique un alzamiento armado o que se instale como vanguardia al frente de las movilizaciones; de hecho, la cultura política de Venezuela, bien o mal construida en las últimas tres décadas, deslegitima la lucha armada y explora canales preferibles sobre la democracia. Pero no hay partido con la suficiente

³² Rey, *El futuro de...* 547.

³³ Cf., vb.gr.: Kevin Neuhauser, “Democratic Stability in Venezuela: Elite Consensus or Class Compromise?”, *American Sociological Review* 57 (1992); Richard Hillman, *Democracy for the Privileged: Crisis and Transition in Venezuela* (Boulder: Lynne Rienner, 1994); Miriam Kornblith y Daniel Levine, “Venezuela: The Life and Times of the Party System”, *Building Democratic Institutions: Parties and Party Systems in Latin America*, Scott Mainwaring y Timothy Sculley, eds. (Stanford University Press, 1995); Daniel Levine, “Goodbye to Venezuelan Exceptionalism”, *Journal of Inter American Studies and World Affairs* 36: 4.

³⁴ Daniel Levine y Crisp Brian, “Democratizing the Democracy? Crisis and Reform in Venezuela”, *Journal of Inter American Studies and World Affairs* 30: 2; Damaris Canache y Michael Kulishek, eds., *Reinventing Legitimacy: Democracy and Political Change in Venezuela* (Greenwood Press, 1998).

³⁵ Gianfranco Pasquino, “Política”, *Diccionario de ciencia política*, Norberto Bobbio, ed. (México: Siglo XXI Editores, 1981) 255.

entereza para captar la simpatía y voluntad popular. De una u otra manera, todos los partidos, incluso el MAS o el Partido Comunista, son asociados al establecimiento o perfectamente desconocidos por la población y sin arraigo.

El sistema, igualmente, no supo responder a tiempo. Si bien, a partir de 1984, creó una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), sus propuestas sólo se plantearon a la opinión pública y se aceptaron en el alto gobierno y los partidos a raíz del *Caracazo*. En concreto, la presión popular recibió como respuesta una tímida apertura del sistema para elegir gobernadores y alcaldes. Pero, si bien dicha medida procuraba en teoría abrir el paso a procesos electorales más abiertos, promover la construcción de nuevas organizaciones políticas locales y canalizar por esa vía la inconformidad pública, gruesa parte de la población vislumbró en las decisiones y cambios del sistema cierto oportunismo e improvisación: no era coincidencia que todas las modificaciones a la Ley del Sufragio desde 1989, ocurrieran durante el año electoral.

La desafección frente al sistema no cedió ante sus nuevas bondades. Por el contrario, en el proceso fue aún más nítida la desconfianza y la abstención. En los primeros comicios para elegir gobernadores de Estado y alcaldes, en 1989, la abstención fue del 55%, en 1992 del 51% y en 1995 del 54%. Más todavía: en contra de lo que se buscaba, el nuevo comportamiento electoral mostró fenómenos de personalización y regionalización de la política, que obraron en contra del propio sistema y profundizaron su crisis.

Esta última aseveración es importante y nos obliga a plantear algunas aclaraciones sobre nuestra hipótesis. En primer lugar, lo trascendente de la crisis económica y su influencia definitiva sobre la política no debe entenderse bajo el imperio simple y vulgar del determinismo.³⁶ La caída del ingreso fiscal petrolero exacerbó y aceleró muchas de las contradicciones y antagonismos que el sistema económico y político había construido en su propia historia: no las creó ni las impuso. Las riquezas generadas por el petróleo, su utilización o quiebra, son instrumentos y hechos del sistema pero no constituyen su estructura ni lo reemplazan.

La construcción social es compleja; se levanta desde diversos ángulos y con múltiples aportes. Ni siquiera el papel de los individuos debe desconocerse. El concepto de individuos se refiere a hombres interdependientes, pero en singular, y el concepto de sociedad a hombres interdependientes, pero en plural. Tal como lo ha demostrado Norbert Elias, “un enfoque holista que intente explicar todo a partir de la sociedad considerada en su conjunto, separaría en forma indebida el análisis del funcionamiento social, del análisis histórico del cambio o de la reproducción”³⁷.

³⁶ En realidad, tampoco fue ese el espíritu de Marx en un análisis histórico tan ejemplar como el realizado en su obra *Las luchas de clases en Francia*.

³⁷ Norbert Elias, *La société des individus* (París: Fayard, 1993). Confróntese al respecto, Michel Wieviorka, “Prólogo”, *Logiques de l'exclusion*, de Norbert Elias y John L. Scotson (París: Fayard, 1965).

De la misma manera, tampoco sería viable explicar un hecho social por su ubicación en una evolución histórica. A esta presunción, Alain Touraine ha opuesto la idea según la cual las sociedades están cada vez menos “en” la historia, y que ellas mismas producen su existencia histórica por su capacidad económica, política y cultural de actuar sobre sí mismas y de engendrar su porvenir y hasta su memoria.³⁸

En ese sentido, la hipótesis de la *privación progresiva* que sugerimos tomar en cuenta como explicación para la historia reciente de Venezuela, no sólo se aplica en términos económicos. Si así fuera, caería en cierto corte estructuralista que ha caracterizado a algunos análisis venezolanos que encuentran en los avatares del petróleo la razón profunda de toda su historia y su malestar.³⁹ Así mismo, no sugiere al Estado y a los partidos como responsables aislados. La hipótesis de Uslar Pietri, según la cual, “los graves males que afectan a la democracia venezolana de manera tan dramática tienen una sola causa y raíz, que es el mal uso y el despilfarro generalizado que los gobiernos sucesivos han hecho de la inmensa riqueza que el petróleo le ha producido al país”,⁴⁰ es fuerte como denuncia pero débil por su funcionalismo extremo.

Más allá de la disfunción de los partidos o de algunos aparatos del Estado, pesa la relación existente entre estos y un esquema rentista que erosionó con su debacle los mecanismos utilitarios y clientelares que sostenían el sistema venezolano. Inspirada en las construcciones teóricas de Gramsci sobre dominación y hegemonía, débil resulta, igualmente, la tentativa de otros autores por encontrar la causa de la crisis en la “pérdida de hegemonía de la clase dirigente”.⁴¹ En los mismos términos gramscianos, habría que demostrar si esa clase dejó de cumplir realmente sus funciones, si abandonó la sujeción de las clases subordinadas o si transitó a la *dominación*.

Sin duda, la hipótesis de la *privación progresiva*, en la forma y contenido que hemos pretendido otorgarle en el presente escrito, se acerca más a las miradas de la crisis como erosión del sistema populista de conciliación que otros analistas han propuesto. Para alguno de ellos, el sistema se mantuvo debido a la confluencia de tres factores: abundancia relativa de recursos económicos con los que el Estado pudo satisfacer las diversas demandas de los sectores sociales; un nivel relativamente bajo y simple de esas demandas que permitió, al mismo tiempo, su satisfacción con los recursos disponibles; y la capacidad de los partidos políticos para canalizar y manejar esas demandas. Una modificación sobre cualquiera de esos factores, traería una amenaza a la estabilidad entera. La falla simultánea de todos ellos representó la

³⁸ Alain Touraine, *El regreso del actor* (Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1987) 202.

³⁹ Cf. M. Pérez Schaell, *Petróleo, cultura y poder en Venezuela* (Caracas: Monte Ávila Editores, 1993); Terry, *The paradox of...*; “The Venezuelan Petro State and the Crisis of ‘its’ Democracy”, *Venezuelan Democracy Under Stress*, de varios editores (New Brunswick [N.J]: Transaction Publishers, 1995).

⁴⁰ Arturo Uslar Pietri, *Golpe y estado en Venezuela* (Bogotá: Norma, 1992).

⁴¹ Ángel Álvarez, “Crisis política y solución constituyente”, *Politeia* 15 (Caracas, 1992).

crisis y la imposibilidad del sistema para continuar con vida.⁴² La diferencia es que esta hipótesis coloca en los aspectos estructurales los puntos clave de la fractura. Nuestra propuesta, en la medida en que implica a los individuos, no desconoce su papel sobre la coyuntura y sobre la transformación misma de la realidad política.

La privación progresiva y la crisis general del sistema que sufre la sociedad venezolana conlleva la acción de los individuos. Es el motor que impulsa decisiones y actos, pero no es la causa –en sí misma–, de los movimientos que con ella se desatan. Las causas deben buscarse en los hechos que empujan el crecimiento de la privación, en el desplazamiento de los lados y la ampliación del ángulo, si recordamos el plano cartesiano. En ese sentido, la hipótesis de la privación progresiva puede abarcar los aspectos estructurales que inciden sobre una coyuntura pero, al mismo tiempo, reconocer la acción de grupos e individuos en su circunstancia concreta.

Los partidos políticos en Venezuela, por ejemplo, no sólo se desmoronan como resultado de las fallas estructurales del sistema, por la caída de los precios del petróleo y la imposibilidad de satisfacer las demandas de sus afiliados. También se desmoronan ante las nuevas estrategias electorales que intentan abrir los procesos de participación como tabla salvadora; por la personalización del voto y las disputas entre los líderes tradicionales. Carlos Andrés Pérez fue candidato presidencial a disgusto de su partido y sin el apoyo de Lusinchi. El COPEI se dividió y Rafael Caldera creó su propio movimiento, “Convergencia”, que lo llevó a la presidencia con el apoyo del MAS.⁴³ Las elecciones estadales modificaron las estrategias de los actores políticos y rompieron los pactos por la base. Los liderazgos de carácter organizacional, emergidos en los partidos, cedieron el lugar a liderazgos individuales surgidos por fuera y en contra de los partidos.⁴⁴ Los dirigentes regionales actuaron sin la anuencia de los nacionales. La población se abstuvo o empezó a decidirse por nuevos movimientos o incluso personalidades de farándula como la reina de belleza Irene Saénz. Aunque no pudieron ocupar el vacío dejado por las viejas maquinarias electorales, en el nivel local se hizo posible el triunfo electoral de partidos diferentes al tradicional bipartidismo: el MAS y Causa Radical (CR), obtuvieron en 1989 un gobernador cada uno, en tanto que en 1992 el MAS alcanzó tres gobernaciones y Causa Radical obtuvo la alcaldía de Caracas. La crisis de los partidos, entonces, brota también de su interior y encuentra actores que la protagonizan desde diversos ángulos.

Precisamente, al señalar el papel de los actores y de las características peculiares de cada coyuntura, la hipótesis de la *privación progresiva* como motor

⁴² Juan Carlos Rey, “La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación”, *Revista de estudios políticos* 74 (Madrid, 1991).

⁴³ En esta ocasión, la oferta básica de Caldera consistirá en sustituir el modelo de desarrollo neoliberal por una política estatista y nacionalista. Su campaña se agitará contra la corrupción, la traición y la promesa incumplida de Carlos Andrés Pérez.

⁴⁴ Michael Penfold, “Sistema de partidos, presidencialismo y cambio electoral”, *Debates IESA* 11 (Caracas, 1999).

de acontecimientos libera un interrogante central. Sin duda, el cuadro económico que hemos dibujado al principio de este acápite podría corresponder en lo fundamental a muchos países latinoamericanos, y la privación progresiva podría estar presente en varios de ellos. ¿Por qué no ocurren situaciones similares a la de Venezuela? La respuesta es sencilla. Venezuela tiene sus propias y muy particulares condiciones que la *privación progresiva* únicamente remueve.⁴⁵

Las condiciones de privación progresiva en Venezuela, explican, entonces, el surgimiento de un grupo de militares de extracción media y baja de la sociedad, que inician la construcción de un movimiento cuyo objetivo sería dotar a Venezuela de “un sistema de gobierno que debe producir la mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.⁴⁶

En efecto, no es gratuito que su fundación ocurriera en 1983 –el año del “viernes negro”–, ni que su mayor impulso ocurriera tras la represión brutal del *Caracazo*. Los estudios que sobre el movimiento militar del 4 de febrero de 1992 se han hecho, coinciden en mostrar sus raíces en la década de los ochenta y su impulso con el 27 de febrero de 1989. Las referencias del propio Hugo Chávez en diversas entrevistas, subrayan igualmente dichas relaciones. A Gabriel García Márquez le relató, por ejemplo, el impacto que sobre sus decisiones tuvo la represión del *Caracazo*. Presenció la salida de oficiales y soldados sin rumbo, “a la calle”, a “obedecer la orden” de “parar la vaina como fuera”: “¡Fue un desastre!”... “Barrían las calles a bala, barrían los cerros, los barrios populares”. “Fue el minuto que esperábamos para actuar...”.⁴⁷

Tampoco es extraño que sean militares quienes reivindiquen, en ese momento, la oposición concreta contra el régimen de Carlos Andrés Pérez. La historia de Venezuela está ligada a la historia de caudillos militares: Juan Vicente Gómez, Isaías Medina Angarita y Marcos Pérez Jiménez, son ejemplo en el siglo XX; la historia del siglo XIX tiene una lista mucho más extensa.

La tentativa del 4 de febrero fue imaginada como operación militar que articularía la movilización de sectores populares en su apoyo, con un análisis que reposaba en la inconformidad que las medidas presidenciales y el ocaso del sistema producían. Por ello el alzamiento se plantea:

⁴⁵ El descontento y la irrupción de gigantes movimientos populares se ha presentado en otros países: Brasil derrocó a Color de Melo, Chile votó un plebiscito final contra Pinochet, Ecuador derribó presidentes, Perú tumbó a Fujimori, México acabó con casi un siglo de gobierno por parte del PRI, El Salvador brindó una votación considerable al Frente Farabundo Martí, Uruguay declaró la crisis de los partidos y colocó a dirigentes políticos en el exilio. Finalmente, en Brasil llegó a la presidencia Luis Inacio ‘Lula’ Da Silva; en Argentina, Nestor Kirchner; en Uruguay, Tabaré Vásquez; y en Bolivia crece la movilización de Evo Morales. ¿Qué papel ha jugado en ellos la *privación progresiva* como motor de descontento? Habría que detenerse en el análisis de cada caso.

⁴⁶ Plataforma política del Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR200. Para una mayor comprensión, puede consultarse: Medófilo Medina, *El elegido presidente Chávez* (Bogotá: Aurora, 2000); y Ángela Zago, *La rebelión de los ángeles* (Caracas: Fuente Editores, 1992).

⁴⁷ Gabriel García Márquez, “El enigma de los dos Chávez”, *Cambio 469* (Bogotá, 2002).

... para garantizar la aplicación de la constitución y la estabilidad de las instituciones democráticas [para evitar] el éxito y la estabilidad de quienes violan, desfiguran y desvirtúan las mismas y usurpan al pueblo su soberanía, violando sus derechos ... ¿Cómo olvidar la condición de pueblo en armas y traicionar a la nación de la cual formamos parte, y que ha manifestado su repudio colectivo al presidente Carlos Andrés Pérez?⁴⁸

La movilización popular no se produjo de inmediato, quizá porque los insurrectos no tuvieron manera de llegar a la población con sus mensajes, quizá porque no utilizaron los instrumentos correctos y adecuados, o porque el pueblo no los entendió o no estaba preparado para respaldarlos. Las explicaciones pueden ser diversas. Pudo ocurrir, igualmente, que Venezuela tuvo temor al atentado en contra de una democracia que, a pesar de sus condiciones, había sido construida como alternativa frente a los continuos levantamientos militares. Por supuesto, las élites no estaban dispuestas a apoyar el golpe y los altos mandos militares las secundaron. La rendición militar de Chávez, sin embargo, se transformó en victoria política al exigir como condición la posibilidad de dirigirse a Venezuela. De esta manera, un desconocido total se convirtió en figura de proyección nacional, en redentor crucificado que con su histórica frase de rendición y derrota, “*por ahora*”, se convirtió también en esperanza de futuro.

Arturo Uslar Pietri pregonaba para 1992 la necesidad urgente de reestructurar a fondo el sistema democrático; convertir sus instituciones en herramientas más adecuadas, eficientes y útiles; lograr la realización más completa de la Venezuela posible y repensar a fondo la nueva realidad. El golpe del 4-F, en su criterio, pudo perseguir este objetivo: “las carencias de la dirigencia política del país y la falsificación de la democracia hubieran parecido no dejar otra salida”.⁴⁹

La interpretación que en similar sentido ofrece otro analista venezolano, es más clara al mostrar la incidencia de Chávez y su MBR 200 sobre la coyuntura. Cuando se produce el fallido intento de golpe militar:

... el pueblo percibe inmediatamente la tremenda significación sociopolítica y la potencialidad transformadora de una situación que se le ha hecho intolerable, implícita en esa acción insurreccional; comienza a tomar fuerza –de forma básicamente espontánea– un movimiento de descontento y desobediencia civil que trata de dar, obviamente, con muchas dificultades y limitaciones, un sentido y una dirección políticas a lo que hasta ahora sólo había sido una mezcla de furia, temor e impotencia frente a hechos desagradables e indignantes.⁵⁰

Sin duda, Hugo Rafael Chávez Frías había empezado a surgir como esperanza.

⁴⁸ Citado por Zago, *La rebelión de...* 144-145.

⁴⁹ Uslar Pietri, *Golpe y estado...*

⁵⁰ Hector Valecillos, *El reajuste neoliberal en Venezuela* (Caracas: Monte Ávila, 1992) 16.